

# LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DOMINICANA

## UN MODELO DE FRUSTRACIÓN

L. ORLANDO HAZA

¿POR QUÉ la República Dominicana no ha tomado antes ni está tomando aún parte efectiva en la Década Internacional del Desarrollo?

¿Por qué la República Dominicana no presenta proyectos al Fondo Especial de las Naciones Unidas, al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y a otros organismos internacionales de financiamiento? ¿Por qué de los pocos que ha presentado al Banco Interamericano de Desarrollo solamente dos han podido llegar a concretarse en préstamos, de los cuales apenas uno ha logrado desembolsarse en parte a un año de firmado?

¿Por qué la República Dominicana no ha podido someter un Plan Nacional de Desarrollo a corto o a largo plazo al Comité de los Nueve de la Alianza para el Progreso, y apenas ha iniciado los trabajos preparatorios?

¿Por qué, en un país en el cual durante dos años se ha tratado de concentrar los esfuerzos y la ayuda de prácticamente todas las organizaciones internacionales y de varios países —principalmente los Estados Unidos—, no se ha producido rápida e intensamente una arrancada hacia el desarrollo? ¿Por qué ni siquiera se ha podido asimilar la ayuda, dirigiéndola hacia inversiones productivas, y se continúa el financiamiento de los déficits presupuestales para cubrir gastos de un pesado aparato administrativo?

Después de haber analizado por algún tiempo los problemas de la República Dominicana, y de haber desarrollado durante 18 meses una intensa actividad en su Junta Nacional de Planificación y Coordinación, tratando de poner en mar-

cha el mecanismo para la elaboración de planes integrales de desarrollo, concluimos en que la respuesta a todas aquellas preguntas radica en que el problema dominicano, al igual que el de otros países menos avanzados de la América Latina, *es un problema eminentemente político*. La necesidad de resolver primero el problema político para abrir el camino a la solución definitiva de los económico-sociales cobra particular vigencia en el caso de la República Dominicana, donde en los últimos dos años se ha visto plenamente confirmado el dictamen emitido por la Comisión Económica para la América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) a principios de 1963: "No nos engañemos. Este asunto (el desarrollo latinoamericano) no va a resolverse en un plano doctrinario, sino eminentemente político. . ." pues "...esta vez el punto de partida es político y no económico, si bien uno y otro convergen a lo mismo. . ." <sup>1</sup>

Esto nos mueve, naturalmente, a plantear el conocido dilema: ¿Pueden independizarse las soluciones de los problemas políticos de los económico sociales? En los países subdesarrollados difícilmente puede esperarse que se resuelva el problema político para tranquilamente acometer entonces la solución de los demás. Pero también debemos admitir y recordar que la iniciación del proceso de desarrollo sostenido, con ritmo aceptable y con base popular, tiene como condición indispensable la realización de un mínimo de reformas sociales: reforma agraria, reforma impositiva, reforma educativa, reestructuración de la banca y de la moneda, etc., para poder convertir inmediatamente al desarrollo en la meta de un esfuerzo consciente y permanente —en una mística— ampliamente conocida, comprendida y aceptada por las grandes mayorías de nuestros países.

Y se da el caso de que, a pesar de existir en la República Dominicana desde hace unos tres años una conciencia de desarrollo bastante difundida, y no obstante que todos los sectores políticos y económicos aceptan en principio la necesidad de las reformas y de la planificación, los grupos que tradicionalmente han detentado el poder no solamente han obstaculizado las medidas efectivas que conducen a tales ob-

jetivos, sino que han provocado el derrocamiento del primer gobierno electo y constitucional que había tenido el país en más de 40 años, y que había ascendido al poder mediante el compromiso de iniciar y realizar las reformas económicas e institucionales básicas.

Estos grupos, compuestos por los que se sienten amenazados con las reformas: latifundistas, grandes propietarios, comerciantes especuladores e industriales de retrógrada visión, se han empeñado en mantener en estancamiento los moldes institucionales, a pesar de que la experiencia ha demostrado claramente que son ellos quienes resultan más beneficiados—con el cambio de localización de sus inversiones— con la redistribución del ingreso, el aumento del nivel de producción y la reestructuración del sistema económico social. Es lamentable que sean precisamente estos grupos los que provoquen revoluciones violentas y radicales, por su negativa a abrir el paso a reivindicaciones elementales que podrían alcanzarse por caminos pacíficos.

Esta dramática situación de estancamiento institucional se repite, con ligeras variantes, en la casi totalidad de los países subdesarrollados, y la República Dominicana no tenía por que ser la excepción. Sin embargo, y tomando en cuenta las peculiares características y etapas por las que se ha desenvuelto, hemos creído que sería interesante para los estudiosos del problema del desarrollo conocer la relación que ha habido entre los sucesos políticos y la frustración de los esfuerzos hacia el desarrollo en este país. Comencemos por analizar los hechos.

### *Los hechos*

*Antecedentes.* Por el natural crecimiento de las comunidades, por una serie de circunstancias favorables de origen interno y externo, y por un fenómeno de ahorro forzoso afinchado en una cruel y despótica política económica diseñada para enriquecer desmesuradamente al tirano Trujillo, su familia y sus allegados, en el periodo 1930-1961 se produce un aumento sostenido y apreciable en la capitalización y producción nacionales.

Entre 1950 y 1958 se alcanzó en la República Dominicana el mayor ritmo de crecimiento económico de su historia. El PNB subió en dicho periodo de 361 a 633 millones de pesos,<sup>2</sup> que corresponde a un ritmo anual promedio aproximado de 8 %. Frente a 3.5 % de crecimiento demográfico, el producto por habitante creció un poco más de 4 % anual, constituyendo uno de los índices más altos que un país latinoamericano haya conseguido sostener durante un periodo tan prolongado.

Un alto índice de inversiones —que llegan al 18 % del PNB en 1958— y un consecuente aumento apreciable en las exportaciones, se afincan en un bajo nivel de consumo, altos impuestos y salarios exigüos para la clase trabajadora. Es decir, se aplica un ahorro forzoso a un pueblo que sufre y se debate en la miseria. La formación de capital se concentra en las manos de una familia que disfruta de la trilogía del poder: militar, político y económico, y que, pese a un consumo extravagante, podía todavía dedicar una parte de su fabuloso ingreso a realizar inversiones que acrecentaran aún más su dominio económico y político sobre toda la población.<sup>3</sup>

A partir de los últimos años de la década 1940-50 la familia Trujillo se convierte en la “empresaria” por excelencia, y sus inversiones van en su mayoría a empresas productivas, aunque frecuentemente mal orientadas por sus bajos rendimientos relativos. Sin embargo, dado el control rígido de los salarios y del mercado interno, así como los privilegios y exenciones de todo género que disfrutaban, los beneficios que estas empresas producían llegaban a cifras espectaculares, afectando adversamente a los beneficios sociales que aparentemente producían en forma de nuevos empleos y estimulación de otras actividades secundarias. Casi todas las empresas rendían anualmente no menos de 15 %, y hubo muchas empresas que produjeron el 50 % de la inversión nominal en los primeros dos años de operación.

Por su misma esencia y condición el régimen de Trujillo no podía aprovechar los beneficios de la ayuda internacional. Apenas pueden contarse unos pocos casos esporádicos de fi-

nanciamiento externo de baja cuantía. Por el desbordamiento del terror y el repudio internacional que final y justiciaramente llegó a tener este régimen, quedó excluida la República Dominicana de la nueva política de cooperación económica interamericana que se inició en 1960 con la inauguración del Banco Interamericano de Desarrollo y que se amplió en 1961 con la aprobación de la Carta de Punta del Este y la iniciación de la Alianza para el progreso.

A fines de 1961, varios meses después de la muerte del tirano, el régimen de la familia Trujillo quedó eliminado, y se abrieron las puertas para la incorporación del país a los programas internacionales de cooperación económica, técnica y financiera.

*La transición.* Desde los últimos meses de la tiranía, ante su inminente fin y como reflejo de la preocupación internacional por el futuro político de la República Dominicana, comienza a producirse y extenderse entre los grupos económicos e intelectuales más activos del país una atención marcada por los problemas del desarrollo y por la búsqueda de soluciones. Posteriormente a la caída del régimen puede decirse que todos los sectores aceptan y propugnan las reformas necesarias, unos sinceramente y otros por conveniencia política, más bien forzados por la tremenda presión que se manifestaba desde fuera y desde dentro del país.

A principios de 1962 se incorporó la República Dominicana a los programas de asistencia internacional, y particularmente a la Alianza para el Progreso, al reanudarse las relaciones diplomáticas con los países del continente. Se produjo entonces una verdadera "invasión" de técnicos y representantes de organismos internacionales de gobiernos amigos. Sin pérdida de tiempo los Estados Unidos propusieron y firmaron un convenio de préstamo de US \$ 25 millones, por intermedio de la recién establecida oficina de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) en el país. La presencia de los técnicos, y la ayuda general, fue gratamente recibida, y se desató una verdadera pasión por atacar los problemas del subdesarrollo y el estancamiento social. En todos

los círculos y asociaciones profesionales, patronales y gremiales, en los periódicos, estaciones radiales y televisoras, se discutían sistemáticamente la reforma agraria, la reforma impositiva, la planificación, la expansión agrícola, las cooperativas, las asociaciones de ahorro y préstamo, etc.

El gobierno de transición, cuya misión fundamental era dar paso a un régimen proveniente de elecciones en el menor plazo posible, aparentemente aceptó y acometió, como etapa preparatoria para el esfuerzo posterior, el establecimiento de nuevos organismos y la reorganización de los existentes. Se instalaron, entre otros, el Instituto Agrario Dominicano, para la reforma agraria; la Corporación de Fomento Industrial, para esimir crediticia y directamente la instalación de nuevas industrias y para administrar las confiscadas a la familia Trujillo y sus allegados; el Instituto Nacional de la Vivienda y el Banco Nacional de la Vivienda, para administrar la política habitacional, y regular —el último— la operación del nuevo sistema de Asociaciones de Ahorro y Préstamo; la Junta Nacional de Planificación, que debería encargarse de estudiar, formular y someter a aprobación los planes nacionales de desarrollo. Se reorganizó el Banco Agrícola de la República Dominicana y se estimuló el crédito agropecuario, en lo que tal vez constituye el programa con más éxito de los últimos años. Se trató de modernizar la técnica presupuestaria. Se estudió la forma de incorporar al cómputo de las cuentas nacionales, y, en general, se produjo un movimiento integral de modernización y adecuación institucional para convertir la política de desarrollo en una responsabilidad nacional consciente.

Desafortunadamente, todas estas tareas básicas y positivas fueron realizadas en su mayor medida como concesión a la presión interna y externa —especialmente a la de los Estados Unidos— y se realizaron sin verdadero entusiasmo por un gobierno de transición representativo en su mayoría de los sectores económicos a los cuales no les interesan las reformas sustanciales, y quienes preferirían mantener la misma estructura de la dictadura con apenas un remozamiento superficial. Todo esto fue acompañado con la creación y

operación de más de una docena de partidos políticos, que recurrieron a la demagogia "revolucionaria" para conseguir los votos en las cercanas elecciones.

Durante ese periodo —enero de 1962 a febrero 1963— se terminó de producir una sustancial redistribución del ingreso, ya iniciada a fines de 1961 por el gobierno remanente de la tiranía. Obedeció a una irresistible demanda de alza de salarios, que aunque fundamentalmente justa no guardó relación con la productividad. A causa de esta alza de salarios —que se verificó tanto en el sector público como en el privado—, y agravada con la ampliación desmedida de la burocracia y el gasto general del gobierno —el cual creció 30 % en relación con 1958— se produjeron presiones inflacionarias de consideración.

El índice de salarios industriales creció en 1962 a alrededor de 150 en relación con 1958, y el nivel de precios casi equiparó esta relación. El nuevo poder adquisitivo que tenían ahora las masas trabajadoras<sup>4</sup> se volcó en el consumo de artículos a los cuales habían aspirado por años, y la oferta no podía obviamente equiparar velozmente este súbito incremento de la demanda, pese a que en el año 1962 se reincorporó a la producción prácticamente toda la capacidad que permaneció inactiva en la depresión de los años inmediatamente anteriores. La inversión total, que había disminuido rápidamente del 1959 al 1961, quedó reducida en 1962 a aproximadamente 9 % del PNB, aportando al sector público menos del 30 % de la misma, cuando durante toda la década anterior fue generalmente superior a la privada. La inversión privada no ha recuperado aún hoy día su nivel de 1958.

La reacción popular después del estrangulamiento político y económico en que se había vivido por más de tres décadas, y la existencia de un gobierno que —además de tener todas las desventajas propias de lo transitorio— no demostró nunca un interés genuino por las reformas básicas, produjeron una situación de indiferencia y de consumo indolente, estimulada por el fugaz bienestar originado en la redistribución del ingreso y en el consecuente y efímero auge del comercio. La importación —favorecida por un buen año de precios inter-

nacionales y por el préstamo de los Estados Unidos a que hicimos referencia— saltó de RD\$ 69.5 millones en 1961 a RD\$ 127.1 millones en 1962 —cifra comparable solamente a los RD\$ 129.5 millones del próspero 1958—, y se fue en una altísima proporción hacia productos alimenticios y manufacturas de consumo corriente.

No hay duda de que era imposible contener las ansias seculares de bienestar que tienen las grandes mayorías del pueblo dominicano, y que por razones políticas tal vez fue conveniente que se sintiese la diferencia entre un régimen tiránico y uno de características liberales. Pero la apreciación de esta diferencia debió ser rápidamente aprovechada para obtener el estado de ánimo y el entusiasmo que requiere un esfuerzo consciente y permanente hacia el desarrollo. Si se permite que este tipo de situación rebase el punto de indiferencia, difícilmente podrá luego conseguirse aquella condición. Y vale la pena recordar que en un régimen liberal la única forma de producir la mística popular es mediante el ejemplo de los dirigentes y en la seguridad de que éstos representan y trabajan en pro del pueblo. Ninguna de estas últimas condiciones se cumplieron en la República Dominicana en el periodo enero 1962-febrero 1963, salvo núcleos y ejemplos muy aislados de gran valor.

*El gobierno electo.* Con esta situación se enfrentó el gobierno electo cuando tomó posesión el 27 de febrero de 1963. Ganador en unas elecciones que contemplaron casi 100 % de asistencia a las urnas, y que le dieron alrededor del 60 % del sufragio, el nuevo gobierno lo formó un partido de extracción popular que subió mediante el voto de campesinos, obreros urbanos y clase media burocrática. Consiguió dicho voto a través de promesas de reforma social hechas al nivel del barrio, de la aldea y del sindicato.

Por primera vez subió al poder un gobierno no representativo de los sectores económicos poderosos, y subió con la simpatía internacional. Rápidamente recibió las ofertas de todos los países desarrollados y de todos los organismos internacionales de ayuda técnica y financiera. Nuevamente

se produjo una "invasión" de técnicos y representantes de gobiernos amigos.

¿Qué mejores condiciones podía reunir el gobierno electo para acometer el esfuerzo consciente y permanente hacia el desarrollo? Gran respaldo popular interno, gran respaldo y simpatía externa, y ambiente propicio.

Pero los obstáculos eran formidables. La presión inflacionaria seguía aumentando, y los aumentos salariales obtenidos por los sectores laborales en 1962 iban disminuyendo rápidamente con la subida de precios. Los organismos propios de los sectores claves (reforma agraria, industria, etc.) o eran muy jóvenes o necesitaban aún la reorganización que debió verificarse para esa fecha, pero que no había tenido lugar en la mayoría de los casos, ya que a los anteriores gobernantes ni les interesó ni hicieron el más mínimo esfuerzo a partir del momento en que se conoció el resultado de las elecciones.

¿Qué caminos tenía el nuevo gobierno? No tenía recursos para promover inversiones en gran escala. No tenía proyectos que pudieran ser rápidamente presentados a los organismos de financiamiento. No tenía suficientes técnicos para prepararlos a la velocidad requerida, ni se había hecho la reorganización necesaria en las fuentes de información y estadística. No tenía un pueblo paciente ni confiado en sus gobernantes, después de vivir toda una vida de presión y desencanto. Y no tenía, por último, la colaboración de los grupos político-económicos desplazados, quienes se lanzaron inmediatamente a la lucha abierta contra el nuevo régimen.

Y el gobierno eligió el camino más impopular. Con el propósito de combatir la inflación recurrió a la disminución de los gastos públicos reduciendo los sueldos y eliminando cargos innecesarios. Ambas medidas fueron impopulares y poco efectivas, ya que la reducción obtenida fue de poca monta —alrededor de RD\$ 2.5 millones anuales— si se compara con la proporción que del presupuesto público estaba y está asignada aún a los cuerpos armados, que es alrededor del 40 %, y que no se atrevió ni podía reducir frente a unos militares ya reafianzados por el gobierno de transición.

Como no tenía tiempo para esperar la elaboración de

proyectos y el trámite requerido por las agencias de financiamiento, recurrió a empresas privadas, lo que fue visto sin entusiasmo por los organismos internacionales y duramente atacado por la oposición. Además, no se produjo los resultados inmediatos que perseguía.

Pero también fue tímido, y no acometió agresivamente los programas de reforma social que eran el núcleo de su campaña electoral, en aras de una planificación que solamente se puede permitir un gobierno estable. A pesar de tener en su poder una enorme cantidad de las mejores tierras del país, confiscadas de la familia Trujillo y allegados, no procedió a entregarlas rápidamente sino hasta última hora, cuando ya no tenía tiempo. Esto produjo el desencanto de los campesinos que habían votado sobre esta promesa, y explica en gran medida su aparente indiferencia ante el derrocamiento del régimen.

Y donde fue tímido el gobierno lesionó los sentimientos de los grupos poderosos, aunque si muchos de éstos hubiesen comprendido el alcance de sus proyectos lo hubiesen apoyado. Desafortunadamente, estos sectores no son de mentalidad moderna —salvo contadas y valiosas excepciones— y muchos de sus componentes basan sus ingresos en privilegios injustificables. A guisa de ejemplo podemos citar la reacción que provocó un proyecto de ley para reintegrar al Estado la plusvalía originada en los terrenos por efecto de obras públicas, modalidad muy frecuente en una u otra forma en los Estados Unidos y otros países económicamente desarrollados, y cuyo propósito fundamental era —aparte de reintegrar fondos públicos con fines de reinversión— estimular la inversión hacia sectores productivos modernos mediante la eliminación de la especulación con la tierra urbana y rural.

Sin embargo, en aquellos sectores de mentalidad moderna, y especialmente en los organismos técnicos responsables de preparar los proyectos y en grupos privados de gran dinamismo, se produjo una movilización favorable, y las medidas concretas empezaron a manifestarse. A pesar de que muchos técnicos se vieron afectados o amenazados por la política de austeridad, y otros sufrieron por el recelo que inspiraba

al gobierno la actividad subversiva ya abierta de algunos sectores de la oposición, la tónica general era trabajar. Sobre todo por la confianza de estabilidad que representaba un gobierno elegido por mayoría tan abrumadora.

Se iniciaron o continuaron numerosos proyectos y obras que podrían haber constituido el núcleo de un ritmo estable de inversiones privadas y públicas. Los organismos internacionales intensificaron sus esfuerzos, y el gobierno aumentó su receptividad, hasta el punto de que poco antes de ser derrocado firmó un convenio muy amplio de asistencia técnica con el grupo tripartito OEA-BID-CEPAL.

La situación económica estaba mejorando para mediados de 1963. El efecto psicológico del programa de austeridad se advirtió, ya que esta vez el ejemplo fue dado en el más alto nivel. La existencia del gobierno elegido y con respaldo internacional estimuló la inversión, pese a la franca oposición de la mayoría de los grupos económicamente poderosos, y durante el periodo mayo-septiembre de 1963 la solicitud de exoneraciones impositivas para el establecimiento de nuevas industrias alcanzó su nivel máximo. Las empresas intervenidas, en las cuales se había reducido sensiblemente el sistema de privilegios, estaban produciendo beneficios. El comercio tenía uno de sus periodos más prósperos, y todos los establecimientos veían un auge que esta vez era real y promisorio de mejores tiempos.

El gobierno electo, cuya característica más notable fue un absoluto respeto a las libertades públicas, podía catalogarse dentro de la llamada "izquierda democrática", en la cual se incluyen al gobierno del partido Acción Democrática de Venezuela, y sus presidentes Betancourt y Leoni; al de Costa Rica, y su líder más conocido, José Figueres, y en cierta forma a los de México y Brasil. Tenía una filosofía, mas características y mas tendencias similares a las de éstos, confirmandose su identificación por la presencia de los líderes mencionados de Venezuela, Costa Rica y Puerto Rico en las ceremonias de inauguración, por las estrechas relaciones que guardaron y por la profunda reacción que a aquéllos su derrocamiento les causó. Fue atacado por los sectores con-

servadores, como aquéllos. Fue acusado de "comunista" o "pro-comunista", como aquéllos. Tuvo el respaldo de Estados Unidos, como aquéllos. Y cometió errores y fue frecuentemente tímido, como aquéllos.

Y ese era el problema: que ese gobierno *podía* hacer las reformas, y eliminar los privilegios, cosa inaceptable para los que por toda una vida habían monopolizado las delicias del poder, sobre estructuras económicas obsoletas.

*Después del golpe.* El 25 de septiembre de 1963 se derrocó al gobierno electo, mediante un golpe militar que fue simple instrumento de recuperación del poder por parte de los grupos conservadores, quienes rápidamente formaron un gobierno representativo de sus intereses.

Inmediatamente se produjo la separación, voluntaria o involuntaria, de muchos de los técnicos más destacados y entusiastas de la maquinaria pública, y la pérdida de interés de los que permanecieron. Muchos de los proyectos que ya estaban en franco proceso de elaboración perdieron la prioridad ante los ojos del nuevo gobierno, el cual se orientó hacia aquellos que lógicamente fuesen más acordes con los intereses conservadores que representa. A pesar de que fueron mantenidos algunos proyectos y programas que el gobierno electo había preparado o iniciado, y a pesar de que se hicieron reiteradas manifestaciones oficiales de que las reformas sociales serían el objetivo principal del nuevo gobierno, el énfasis real varió hacia aquellos campos que distrajeran la atención de las reformas y que al mismo tiempo fuesen administrados y beneficiados por los componentes y servidores del grupo en el poder, los cuales se mantienen en estériles pugnas internas sin significación histórica.

Hoy la situación política es inestable. Nadie, ni los propios gobernantes ni los líderes militares, saben qué puede pasar en un futuro previsible. La gente está cansada de lo que para ella es apetitos de poder. Se anuncian unas nuevas elecciones, y los inversionistas potenciales, tanto nacionales como extranjeros, no se atreven a tomar decisiones que puedan quedar afectadas por los futuros acontecimientos polí-

ticos. La fuga de capitales, notoria desde 1960, ha adquirido carácter institucional. Los funcionarios técnicos de un régimen necesariamente temporal no tienen ni el estímulo ni la osadía de encaminar programas que puedan irse luego a tierra o servir de base a futuras acusaciones, válidas o no.

### *Conclusiones*

¿Cuál será, pues, la conclusión fundamental de este ensayo? ¿Por qué hemos hablado en un lenguaje más propio de estudiosos de la política que de los problemas del desarrollo?

Porque *hasta que no se resuelva el problema político básico no hay posibilidad de iniciar soluciones sólidas al económico social*. En un ambiente de inestabilidad, desesperanza y cansancio, como el que ahora existe, no se puede esperar que la inversión alcance niveles apreciables. No se le puede pedir a un pueblo que sea desinteresado y que haga sacrificios para beneficio futuro si no tiene una seguridad mínima de que su esfuerzo no va a ser aprovechado por otros grupos privilegiados.

A menos que ese esfuerzo le fuese impuesto como lo hizo la tiranía. Pero este método difícilmente duraría ya lo suficiente como para que pueda producir resultados, sean quienes sean los beneficiarios. Ni el pueblo ni la situación internacional lo permitirían.

Entonces, ¿cuáles son las perspectivas? La continuación del *status quo* por un tiempo imprevisible, probablemente. Inversión insuficiente; presiones inflacionarias o inflación abierta, como causa y efecto de la inquietud laboral y de las medidas demagógicas que el gobierno ya ha iniciado (bonificaciones y regalías desmedidas) como paliativos de aquella inquietud; inestabilidad política, que probablemente se expresará mayormente en cambios de nombres dentro del mismo grupo gobernante; fuga de capitales nacionales; etc., serán probablemente las características de este periodo. Después de la experiencia del derrocamiento de un gobierno electo por una mayoría tan amplia como lo fue aquél, difícilmente pueden los inversionistas confiar en que sus decisiones contarán

con un mínimo de seguridad a mediano o largo plazo. Lo lógico es que se persigan los negocios fáciles. El resultado global es bien conocido por los familiarizados con los países subdesarrollados: bajo ritmo de crecimiento —o decrecimiento—, y continuación o agravación de las condiciones generales de miseria y hambre.

Y, aunque exista una conciencia de desarrollo muy difundida, difícilmente podrá empezarse a salir de esta situación hasta que no llegue al poder un gobierno con raigambre democrática, popular, con el prestigio, la autoridad moral y la decisión necesarios para acometer rápidamente las reformas sociales que son requisito previo y base de una amplia campaña de movilización de recursos tanto nacionales como internacionales. Un gobierno que pueda estimular y conseguir el sacrificio y el entusiasmo populares que componen la conocida e imprescindible mística del desarrollo, como se ha visto en mayor o menor grado en los países que han conseguido significativos ritmos de crecimiento.

#### *La asistencia internacional*

Para terminar, ¿qué puede hacer en estas condiciones la asistencia internacional? Muy poco, obviamente. Mientras no se cumplan aquellos requisitos mínimos de tipo político, poco productivos serán los esfuerzos y la ayuda de instituciones de asistencia. Difícilmente podrá conseguirse un flujo estable de proyectos que reúnan las condiciones de las agencias de financiamiento.

Probablemente el campo de acción más fructífero y propicio, donde tal vez debía concentrarse la ayuda en casos como éste, es el entrenamiento de técnicos y funcionarios públicos y privados, y en la identificación y elaboración de proyectos convenientes al país, de modo que cuando se produzcan las condiciones políticas favorables exista ya suficiente material humano y documental para la rápida arrancada, y no se cree estrangulamiento de tipo técnico como el que tanto daño hizo en 1963 al gobierno electo en la República Dominicana.

## NOTAS

<sup>1</sup> "Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano", documento preparado por la Comisión Económica para la América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), para su presentación en la X Reunión de dicho organismo en la ciudad de Buenos Aires, 1963.

<sup>2</sup> Calculado en precios corrientes, refleja el crecimiento real por la estabilidad del nivel de precios de ese periodo. Todos los datos de estos párrafos son originales del Banco Central del país, la República Dominicana, salvo nota contraria. Aunque estas cifras pueden contener errores estadísticos apreciables, nunca serán tal altos como para que las proporciones que dan base a la argumentación pierdan su validez. Muchas de las interpretaciones comentadas corresponden a estudios hechos por organismos internacionales, especialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo.

<sup>3</sup> Según se constató posteriormente, la familia Trujillo y sus allegados controlaban aproximadamente, el 10 % de la tierra cultivable, y entre otras propiedades y comisiones sobre negocios públicos —que administraban como propiedad particular— recibían una altísima proporción del ingreso nacional. No hay cifras exactas ni confiables, pero se estima que dicho grupo recibía no menos del 15 % al 20 % del ingreso nacional.

<sup>4</sup> Se refiere casi exclusivamente a los obreros, ya que el trabajador rural no se benefició apenas de esta alza general de salarios, como suele suceder. Con excepción de los trabajadores de empresas industriales del tipo de ingenios de azúcar, etc. Considerando que aproximadamente el 70 % de la población dominicana es rural, puede apreciarse que dicha alza de salarios afectó a una proporción muy baja de la población total, y el gran impacto económico que aquella ocasionó nos confirma la gran concentración del ingreso a que nos hemos referido.